

Ministerio Público
DEFENSORÍA DEL PUEBLO
DEFENSORÍA DELEGADA PARA LA EVALUACIÓN DEL RIESGO DE LA POBLACIÓN CIVIL
COMO CONSECUENCIA DEL CONFLICTO ARMADO
Sistema de Alerta Temprana – SAT

INFORME DE RIESGO No. 005

Fecha: 5 de febrero de 2.004

LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL RIESGO

Departamento	Municipio o distrito	Zona urbana			Zona rural		Territorio étnico	
		Cabecera, localidad o zona	Comuna	Barrio	Corregimiento	Vereda	Resguardo	t. colectivos
Tolima	Cajamarca				Anaime	Potosí, La Plata, Las Hormas, La Judea, El Águila, Arenillal, La Leona, La Despunta y El Oso		
Tolima	Ibagué				Cocora, Laureles, Dantas, Toche y Tapias			

POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE RIESGO

Indígenas

☐

Afrodescendientes

☐

Otra población

☒

El riesgo de consumación de violaciones masivas a los Derechos Humanos se concentra en las zonas aledañas a la Troncal de la Línea circundada por los Cañones de Anaime y del Cocora, y por los corregimientos de Toche y Tapias. El riesgo en esta región que concentra cerca de once mil campesinos, siendo los más afectados los habitantes de los cascos urbanos de los corregimientos de Dantas, Laureles, Cocora, Tapias y Toche en la zona rural de Ibagué y el corregimiento de Anaime, veredas Potosí, La Plata, Las Hormas, La Judea, El Águila, Arenillal, La Leona, La Despunta y El Oso se centra en las amenazas proferidas por las autodefensas después de que realizaran la masacre de Potosí en Cajamarca. Estas amenazas las realizan por medio de incursiones armadas de pequeños grupos que escriben letreros alusivos en las paredes de las casas y profieren amenazas en forma verbal y telefónica contra supuestos auxiliadores de la guerrilla.

Sede Central: Calle 55 No. 10-32
Tels: 3147300 Ext. 2437 Telefax 6915300
Bogotá, D.C., Colombia

1-10-287

Ministerio Público

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

DESCRIPCION DEL RIESGO

1. CONTEXTUALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO:

Las áreas rurales de los municipios de Cajamarca e Ibagué se han convertido en los últimos meses en territorios de disputa entre los actores ilegales armados debido a su localización geoestratégica en inmediaciones de troncal de la Línea, arteria vial que articula al Tolima con los departamentos del eje cafetero y el puerto de Buenaventura en el Valle del Cauca. Esta arteria ha sido empleada históricamente por los frentes 50 y 21 de las FARC, sin embargo a partir del año 2003, las Autodefensas entran a disputarles el control del territorio a los insurgentes arremetiendo contra la población civil estigmatizada de cohonestar con la guerrilla. En la actualidad las FARC han intensificado su accionar instalando retenes armados en la vía y las Autodefensas amenazando e intimidando a los campesinos de la zona, con lo que aumenta la factibilidad de ocurrencia de homicidios selectivos de configuración múltiple, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, bloqueos de vías y de bienes indispensables para la subsistencia.

2. GRUPOS ARMADOS ILEGALES EN LA ZONA

FARC ☒ ELN ☐ AUC ☒ OTRO ☐

3. GRUPOS ARMADOS ILEGALES FUENTE DE LA AMENAZA

FARC ☒ ELN ☐ AUC ☒ OTRO ☐

4. FACTIBLES INFRACCIONES AL D.I.H.

- ATENTADOS CONTRA LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA INTEGRIDAD FISICA DE LA POBLACIÓN CIVIL (desaparición forzada, homicidio selectivo, de configuración múltiple, masacre)
- UTILIZACIÓN DE METODOS O MEDIOS PARA GENERAR TERROR EN LA POBLACIÓN CIVIL
- DESTRUCCIÓN DE BIENES CIVILES Y/ O AFECTACIÓN DE BIENES INDISPENSABLES PARA LA SUPERVIVENCIA DE LA POBLACIÓN CIVIL.
- DESPLAZAMIENTO FORZADO DE LA POBLACION CIVIL.
- AFECTACIÓN DE LA POBLACIÓN CIVIL COMO CONSECUENCIA DE ACCIONES BÉLICAS (enfrentamientos con interposición de población civil).

5. DERECHOS FUNDAMENTALES AMENAZADOS:

- A LA VIDA
- A LA INTEGRIDAD PERSONAL
- NO SER DESAPARECIDO
- A LA LIBERTAD PERSONAL
- A NO SER DESPLAZADO
- A LA LIBRE CIRCULACIÓN
- A LIBERTAD DE RESIDENCIA

Sede Central: Calle 55 No. 10-32
Tels: 3147300 Ext. 2437 Telefax 6915300
Bogotá, D.C., Colombia

Ministerio Público

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

VALORACIÓN DEL RIESGO

La configuración social de Cajamarca guarda estrecha relación con la movilización campesina por el derecho a la tierra. La asociación de Agricultores de Cajamarca y Anaime – AGRICA – se destaca como una de las más importantes en este proceso, por medio de la cual se logró la parcelación de algunas fincas, entre ellas la “Florida” ubicada en la vereda Potosí, como forma de solución a la indebida distribución inexistencia de suelos productivos para la explotación. Este proceso se constituyó en un hito histórico que permitió la cohesión social de los parceleros e incentivó a los campesinos a la defensa por el derecho a la tierra.

Con relación a la presencia de los actores ilegales armados, la región por su localización geoestratégica –eje vial y corredor natural-, se convirtió en objetivo de control, especialmente para las FARC, grupo que a mediados de la década del noventa incursionó al territorio atacando la estación de Policía de Anaime, logrando el dominio territorial y poblacional, esta acción estuvo acompañada por mecanismos de presión, intimidación, asesinatos selectivos y extorsiones contra los finqueros para facilitar la implantación del proyecto insurgente y como forma de financiación, situación que incidió en la zona rural de Ibagué, en especial la zona del Cañón del Cocora que limita con el corregimiento de Anaime.

Con la proyección del megaproyecto de infraestructura física para la región denominado Túnel de la Línea –el cual acortará el trayecto de recorrido entre el centro con el eje cafetero y el occidente del país-, que además impulsa proyectos de desarrollo –Ecoregión- en los departamentos de Quindío como centro turístico, Tolima, núcleo agroindustrial, Risaralda, foco comercial y Manizales eje de bienes y servicios, la zona adquiere una nueva significación económica, política y social. Estos factores de desarrollo inciden en el incremento de factores de violencia en el marco del conflicto armado a partir de la llegada de las Autodefensas bloque Tolima, con el objetivo de disputarle el territorio a las FARC. Esta confrontación bélica se focalizó en el corregimiento de Anaime como epicentro y en otras zonas por la cercanía con la zona rural de Ibagué como son los corregimientos de Toche, Tapias, Dantas, Laures y Cocora.

Las Autodefensas en su proceso de expansión territorial, han dirigido sus acciones violentas contra los líderes campesinos que habitan en la vereda Potosí ubicada en el Cañón de Anaime, especialmente contra aquellos que abanderaron el proceso de toma de tierras en el mes de marzo de 2003 en la finca la “Manigua”. Este proceso, en sus inicios tuvo reivindicaciones sociales hasta que se convirtió en un conflicto político debido a la injerencia de las FARC en las reivindicaciones de los labriegos; situación que generó enfrentamientos con el ejército, antecedentes que reposan en diversas quejas presentadas por las organizaciones sociales ante la Defensoría del Pueblo Regional Tolima, en las que dan cuenta del empadronamiento contra los campesinos de la finca La Manigua, al parecer por el estigma de auxiliar a la guerrilla que recae sobre los pobladores del cañón de Anaime.

A la confrontación armada se le agregan factores de vulnerabilidad como son la estigmatización de habitantes de la zona rural de Cajamarca e Ibagué como auxiliares de la guerrilla, situación que incluso ha generado detenciones masivas como la que llevó a cabo la Fiscalía en el mes de agosto de 2003 de 57 personas entre las que se encontraba el párroco de Anaime; la configuración social de esta comunidad se ha visto afectada por la masacre realizada en la vereda Potosí y por el hecho de que los líderes campesinos que impulsaron el desarrollo agrícola de Anaime han tenido que abandonar la zona para salvaguardar sus vidas, prueba de esto es la presencia de aproximadamente 120 personas desplazadas que se han ubicado en la cabecera municipal de Cajamarca, cifra que tiende a aumentar a diario, puesto que el éxodo campesino continúa debido a las amenazas y hostigamientos que no han cesado desde la incursión de las autodefensas.

Sede Central: Calle 55 No. 10-32
Tels: 3147300 Ext. 2437 Telefax 6915300
Bogotá, D.C., Colombia

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Este panorama de riesgo se agravó en la primera semana de noviembre de 2003, cuando un grupo de hombres armados que se identificaron como integrantes de las AUC incursionaron en la vereda Potosí y procedieron a desaparecer a varios labriegos entre los que se encontraban Germán Bernal, Jesús Céspedes, Ricardo Espejo y Marco Antonio Rodríguez, cuyos cuerpos fueron hallados con visibles muestras de mutilación en sus extremidades. Estas personas habían sido tildadas de auxiliar a la guerrilla, algunos de ellos habían participado en la toma de tierras de la finca La Manigua y otros eran familiares de personas detenidas masivamente por la fuerza pública en la operación Pijao que se llevó a cabo en el mes de agosto de 2003. Las amenazas constantes seguidas de asesinatos y el hurto de ganado –que fue adjudicado en el marco del proyecto bovino de la gobernación del Tolima-, ha generado desplazamientos de numerosas familias de la región.

Por otra parte, a la situación de zozobra y terror generada por la presencia de las AUC, se suman las acciones de sabotaje perpetradas por las FARC en la troncal de La Línea en el sitio conocido como Pericos en las últimas semanas, las mismas que han arrojando como saldo el asesinato de dos policías, de un civil y la quema de vehículos, así como el hostigamiento el día sábado 17 de enero de 2004 al corregimiento de Anaime y el martes 20 de enero de 2004 a la cabecera municipal de Cajamarca, incrementando con esto las violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario especialmente contra la población civil asentada en las áreas rurales de Ibagué y Cajamarca.

Hasta el momento, el único factor de protección es la fuerza pública que mantiene un estricto control para garantizar la seguridad sobre la Línea y el corregimiento de Anaime, aún así, es factible que ante el incremento de las amenazas, la consumación de violaciones masivas de derechos humanos y la disputa por el control territorial de la zona incrementa la situación de riesgo, trasladándose hacia la zona rural de Ibagué corregimientos de Toche, Tapias, Cocora, Dantas y Laureles, tanto por la cercanía como por las estrechas relaciones sociales, entre otras, que mantienen los núcleos poblacionales con la zona del corregimiento de Anaime.

Teniendo en cuenta lo argumentado, se reitera que la situación de riesgo sobre la población civil está determinada por los propósitos de disputa de los actores ilegales armados y los mecanismos de violencia empleados, se prevé por parte de las Autodefensas posibles homicidios selectivos de configuración múltiple, masacres, desplazamientos forzados y desapariciones forzadas, especialmente el zona rural de Ibagué y por parte de las FARC, la realización de acciones de sabotaje en la troncal de la Línea que pueden derivar en asesinatos de población civil, además de realizar amenazas, desplazamientos forzados y asesinatos selectivos de configuración múltiple contra supuestos auxiliares de las autodefensas. Con el agravante que son poblaciones involucradas en situaciones como la impunidad en cuanto a esclarecer los crímenes de lesa humanidad como los perpetrados en la vereda Potosí que aún no arrojan resultados y la situación de desprotección en materia social y económica, la falta de soluciones efectivas a las víctimas del desplazamiento forzado, aumentan la situación de vulnerabilidad en que se encuentran.

NIVEL DEL RIESGO: ALTO: ☐ MEDIO: ☐ BAJO: ☒

DEFENSORÍA DEL PUEBLO**AUTORIDADES VINCULADAS AL DEBER DE PROTECCION****AUTORIDADES CIVILES:**

RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL, PROCURADURÍA, FISCALÍA, PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DIH, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, ALCALDÍAS DE CAJAMARCA E IBAGUÉ Y GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

FUERZA PÚBLICA:

- **EJÉRCITO:** SEXTA BRIGADA
- **POLICIA NACIONAL:** COMANDO DE POLICÍA DEL TOLIMA. POLICÍA CAJAMARCA

RECOMENDACIONES

Previo la valoración del presente Informe de Riesgo, se solicita al CIAT la expedición de la alerta temprana correspondiente con las recomendaciones urgentes a las autoridades para adoptar medidas tendientes a disuadir, mitigar o neutralizar el riesgo, en particular nos permitimos recomendar:

- Esclarecer los hechos ocurridos en la masacre de Potosí en donde presuntamente se podrían ver involucrados miembros de la fuerza pública.
- Que con la participación de la Vicepresidencia de la república, el Ministerio del Interior, La Gobernación del Tolima, las alcaldías de los municipios de Ibagué y Cajamarca, y las autoridades militares y policiales en el marco de sus competencias adopten un plan coordinado de acciones para garantizar la vida e integridad de las personas cuya situación de riesgo se advierte en el presente informe.
- Reforzar los dispositivos de seguridad por parte de la Fuerza Pública en los corregimientos de Anaime jurisdicción del municipio de Cajamarca y Cocora, Laureles, Dantas, Toche y Tapias en Ibagué. Igualmente, el fortalecimiento de la acción por parte de la Policía en las cabeceras municipales.
- Previas garantías de seguridad por parte de la Fuerza Pública, bajo la coordinación de la Red de Solidaridad Social y veeduría de organismos internacionales como ACNUR, ONU y CICR se evalúe la posibilidad de iniciar un proceso de retorno de los campesinos a mediano plazo. De igual forma se sugiera la adopción de un plan de prevención y protección que impida el desplazamiento de familias campesinas de la zona rural de Ibagué.
- Para el fortalecimiento institucional, se recomienda el apoyo de la Oficina de Paz del Tolima, a las Personerías municipales de Cajamarca e Ibagué y a la Defensoría del Pueblo Regional promover la realización de talleres en el tema de resolución pacífica de conflictos, igualmente, llevar a cabo una campaña de respeto al Derecho Internacional Humanitario que permita mitigar el riesgo de la población civil y por ende la distinción entre combatientes y no combatientes.

Ministerio Público

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

- A la Red de Solidaridad Social, con el apoyo del CICR, ACNUR y la Defensoría del Pueblo promover la atención de la población desplazada en Anaime y lograr la pronta atención socio-económica de la comunidad afectada.
- Es necesario que la gobernación del Tolima con el apoyo del gobierno nacional implemente un plan especial de emergencia humanitaria, con el fin de atender a los familiares de las víctimas de la masacre perpetrada en la vereda Potosí, así como lograr el restablecimiento del tejido social fracturado por el desplazamiento forzado de gran parte de la población.
- Al estado colombiano, por medio del Programa de Derechos Humanos y DIH iniciar el proceso de reparación de las víctimas afectadas por la masacre de Potosí.